

CONTEXTO ACTUAL

Una preocupación recorre buena parte de la ciudad: la **inseguridad**. Nuestra ciudad despunta en el siglo XXI, según las estadísticas del Departamento de Investigaciones Criminológicas y Apoyo Judicial (DECYPOL) con una tasa de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca en el no muy honroso lugar, de ser quizás la ciudad más peligrosa del mundo¹. En el período de 1998 a 2002 se tuvo un promedio anual de 3.200 muertes violentas y el decenio, entre 1992-2002 registró 42.393 muertes violentas en la ciudad.

A partir de la década de los 80's encontramos una relación inversa entre los homicidios y el número de delitos denunciados: en 1981 por cada homicidio que ocurría en la ciudad se denunciaban 14.5 delitos, pero este número desciende en 1985 a 11. ¿Qué pone en evidencia este hecho? La puesta en marcha de los aparatos de justicia privada, la aplicación de justicia por mano propia y la crisis de la justicia colombiana, la deslegitimación del aparato judicial y, en últimas, que las relaciones entre los individuos y la cosa pública definitivamente entró en crisis.

Hay elementos de las expresiones de violencia urbana que Medellín comparte con otras ciudades de América Latina. Una buena parte de los crímenes son cometidos por jóvenes y, en todas partes, aparece la droga como un factor relevante. Se señalan como características comunes más sobresalientes, las siguientes: la pobreza y las desigualdades sociales, las que "generan agudas tensiones sociales". La evidencia recogida, muestra que algunos componentes de este deterioro tienen una repercusión directa en la criminalidad, por ello, las altas tasas de desocupación juvenil se convierten en tema de preocupación urgente para el conjunto social y la Administración pública, lo mismo que el deterioro familiar ya que tiene consecuencias negativas, afectando su papel en la prevención del delito.

Si estos factores se unen con la pobreza, encontramos que la desarticulación familiar se convierte en elemento de violencia altamente relevante, pues la violencia intrafamiliar adquiere características alarmantes.

De igual forma, hay una correlación directa entre nivel educativo y criminalidad, y la explicación, a manera de hipótesis general, es sencilla: a mayor nivel educativo, menor criminalidad. Medellín, sin duda, encaja perfectamente en este perfil general.

En Medellín existen barrios enteros, por no decir comunas, que se encuentran sitiados por los diferentes actores armados. En donde la confrontación armada es abierta y va de la mano de la intensificación y, a la vez, degradación del conflicto.

¹El Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia- trae datos estadísticos que también son recogidos por Daniel Pécaut (1997) que nos permiten dimensionar esta situación: Brasil viene con una tasa de homicidios de 24.6 por cada 100.000 habitantes, Panamá de 22.9, México 20.6, Venezuela 16.4, Perú de 11.5 y Estados Unidos de 8. En contraste, Noruega sólo llega a 0.9 homicidios.

De esta forma, el conflicto urbano, presenta como particularidad el hecho de hacer más visibles a todos los actores sociales, los nuevos y los viejos, los que defienden intereses que históricamente han conculcado a las mayorías y los que pugnan por el acceso al libre disfrute de su ciudadanía, los que pugnan por el cambio de estructuras, los que viven de explotar las expectativas y desesperanzas de los pobres y los convierten en simples instrumentos. Todo ello en la medida en que son más abiertos los enfrentamientos.

Digamos de paso, que la existencia de grupos organizados que actúan ilegalmente, sin que puedan ser sometidos por el Estado, ha creado en el imaginario colectivo la impresión de que éste ha perdido el monopolio del uso de la fuerza y que, en consecuencia, se considera lícito organizar grupos armados autónomos -¿autodefensas? ¿servicios de seguridad?- que en su accionar desarrollan sus propias concepciones sobre la vida y la justicia. De tal manera que los espacios que debería ocupar el Estado, en situaciones de crisis como la que ha vivido la ciudad desde los años 80, son copados por aparatos de violencia.

Una visión integral del conflicto urbano nos permite identificar orígenes y causas diferentes que generan tipologías conductuales distintas de los actores que se adscriben bien a la delincuencia organizada, bien a las milicias subversivas, bien a los combos barriales, o bien a las autodefensas.

Una primera manifestación de la violencia urbana tiene que ver pues con la convivencia ciudadana, con la cotidianidad, con la vida diaria, con la construcción de ciudadanía. Ciudades del desarraigo, cunas de la pobreza y expresiones de la exclusión, de la desterritorialización solo podían producir violencia.

Esta violencia cotidiana esta referida a la carencia de reglas sociales y tiene como primera expresión la criminalidad común: son los que atentan contra la propiedad, la que emana de las pandillas juveniles. Otra expresión se encuentra en las llamadas "limpiezas sociales": acabar con la vida de quienes encarnan las patologías sociales: los drogadictos, prostitutas, homosexuales, gamines, mendigos, etc. Y una última expresión se ubica en el terreno de lo microsociales, en donde destacan con luz propia la violencia intrafamiliar y los conflictos vecinales.

La violencia emergió como factor estructurante de las formas de socialización de las bandas juveniles, actuando en la misma forma que antes lo hicieron los enfrentamientos deportivos y las celebraciones cívicas. La violencia se constituyó en la forma por excelencia del vínculo social.

En segundo lugar, tenemos que mencionar el problema del narcotráfico, pues sus efectos en el relacionamiento social son innegables. Entre ellos, la violencia que se alimentó de las condiciones sociales de sectores desfavorecidos y que están asociados a la figura de Pablo Escobar y otros "patrones"², tiene una repercusión tremenda en la vida de la ciudad.

²Alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos armados delincuenciales a los barrios populares con distintas

Después de doce años de violencia ininterrumpida, los rasgos culturales propios que surgen de este problema, tienen raíces y dimensiones muy profundas: La transmisión generacional de la cultura de la violencia es un signo de inmensa preocupación³. El llamado Cartel de Medellín, desde 1985 puso en marcha las grandes redes sicariales y colocó bajo su égida y servicio a grupos de pobladores desposeídos, convertido en miembros de bandas barriales, y a otros jóvenes, muchos de ellos venidos de la misma insurgencia

El narcotráfico llevó el conflicto urbano, por los medios que ha utilizado, a niveles mayores de degradación y de deshumanización. Esta es una deuda histórica que tendrá que pagar.

No obstante estar el narcotráfico en todos los barrios de la ciudad, sin distinción de condición socioeconómica, sí es claro que su forma de penetración varió de acuerdo al nivel cultural y los ingresos. De hecho, el narcotráfico encontró en esa población pobre y aislada de la legalidad y de las pautas culturales que sostienen el Estado, una situación favorable para su utilización, bien como correos humanos (mulas) o como integrantes de sus escuadrones de seguridad y de delincuencia (crimen organizado).

Siguiendo por analogía con Romero (1976), podríamos concluir que el narcotráfico produjo una masa que no posee un sistema coherente de actitudes ni un armonioso conjunto de normas, pues la casuística se imponía y cada “patrón” imponía sus propias leyes y normas, generaba sus propios estilos de vida.

Para enfrentar a las bandas, cuyo poder crecía sin coto y al amparo de una policía ineficiente y corrupta, que cobraba *impuestos* a las casas de expendio de vicio, y que traficaba con armas, la comunidad de los barrios populares también decidió crear sus propias formas de autodefensa: padres de familia, comerciantes y jóvenes “a lo bien” se unieron para proteger a la comunidad, actuando anónimamente y encapuchados –por eso se les denominó “los capuchos”- Aunque tuvieron una capacidad militar muy limitada, ajusticiaron ladrones, asesinos, violadores, drogadictos y a quien ellos consideraron indeseable. No tenían pretensiones económicas ni políticas, su única meta era sobrevivir y proveerse de un espacio vital para sus familias.

funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas. Se fortaleció entonces un aparato militar liderado por Pablo Escobar , Alfredo Vásquez "El Pana", John Jairo Velásquez "Popeye", Carlos Aguilar "Mugre", Otoniel González "Otto" y los hermanos Mosquera ("La Quica y Tyson")" (Elizabeth Yarce, 2002)

³Según algunos autores –Jesús Martín barbero, María Teresa Uribe, Alonso Salazar, entre otros – han surgido rasgos culturales o una “cultura de la violencia” –cultura de la violencia familiar y sexual, la de la violencia escolar, la violencia laboral, etc.- que se ha transmitido a lo largo de estos últimos 15 años de manera generacional. Sin pretender intervenir en la existencia o no de dicha cultura, quiero precisar qué se entiende en este documento como cultura de la violencia: el desconocimiento del orden jurídico, mediado por el Estado, que es reemplazado por la utilización de la fuerza con el fin de lograr objetivos particulares. Se trata, en esencia, de la quiebra de la autoridad del Estado y de las Instituciones para integrar a los asociados en un sistema de normas y valores.

De otro lado, en tercer lugar y agravado por la delincuencia que surgió con el narcotráfico, aparecen las marcas del conflicto nacional, de naturaleza política e ideológica, con su expresión directa en la ciudad.

Como producto de la exclusión política, de la falta de participación, de la incoherencia de la Administración Estatal y de su ausencia absoluta en algunos sectores de la ciudad se tiene la pérdida de legitimidad del Estado y, por ende, la disputa sobre su autoridad y poder. Así tenemos como expresión urbana en Medellín –al igual que en otras ciudades del país- una lucha territorial entre las milicias de los FARC y el ELN, y las autodefensas.

El M19 mostró el camino, desde 1984, cuando pactó un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y desarrolló una estrategia de presencia urbana creando los que llamó “*campamentos urbanos*”⁴. El ejemplo fue seguido por los otros grupos de insurgentes, quienes antes consideraban la militancia de la ciudad como simple apoyo logístico y de divulgación política.

La estructura de *tipo Milicia*, busca aprovechar la mayor cohesión social barrial o vecinal, que determina relaciones primarias, “cara a cara”, bajo el supuesto de que ellas nacen del hecho de compartir un territorio, una identidad de normas y valores y una historia de lucha. Por supuesto, el espacio que mejor se acomoda a esta concepción es el que ofrece cualquier barrio de invasión en las ciudades y en forma subsidiaria, los barrios piratas y de pobladores pobres.

La estrategia que se había desarrollado hasta entonces, por parte de la insurgencia, era reconocer la ciudad como un centro de aglutinamiento de simpatizantes, de acopio, propaganda y retaguardia. En ese proceso se “aliaban” con los líderes naturales de la comunidad y se ligaban a las luchas estudiantiles y comunitarias en defensa de reivindicaciones de todo tipo.

Pero a partir de 1985, con la presencia del narcotráfico, el peso que adquieren las bandas –también se les llamó “bandolas”- y la guerra sucia que se estableció desde los organismos de seguridad del Estado, con una política sistemática de debilitar el aparato guerrillero, asesinando los líderes comunitarios y los simpatizantes, se dio un viraje en la estrategia miliciana hacia la autodefensa.

En este contexto se produjo la disidencia de muchos milicianos, que comenzaron a comportarse como ***sujetos desgajados*** (Salazar, 2003) algunos, que perdieron las perspectivas, fueron cooptados por aquellas bandas al servicio del narcotráfico, asumiendo un comportamiento contrario a la lógica de la organización de la cual provenían y defendiendo un sistema social que supuestamente habían querido destruir. En este proceso, su foco de atención

⁴ En el Congreso de la Paz y la Democracia del M19, que se celebró en la localidad de Los Robles, Departamento del Cauca en 1984, se decidió que el M19 sería “gobierno” y para ese objetivo nace el proyecto de crear las Milicias Bolivarianas que tendrían como asiento las ciudades, ellas serían núcleos de base del movimiento guerrillero, actuando bajo la dirección directa del M19 –a la manera de los ***sujetos insumisos***- que, sin perder el norte de la toma del poder, funcionarían como representantes de la guerrilla y buscarían compenetrarse con la comunidad, articularse a ella a través de la solución de problemas cotidianos. Serían grupos multifuncionales con actividades propagandísticas, políticas y militares, además de las sociales y comunitarias.

para los ataques fueron sus antiguos compañeros, en una suerte de cacería de brujas. Llegan efectivamente a esta posición, al considerar que existió un comportamiento pusilánime por parte de sus líderes guerrilleros y un paquidermismo en la toma de decisiones, o bien, que simplemente no hicieron absolutamente nada ante el crecimiento de las bandas. En este orden de ideas, se vendieron al mejor postor, el que les ofrecía el respeto por su vida, dinero y poder en sus barrios.

Otro grupo de milicianos también desgajados y desencantados, consideró que la operatividad de la guerrilla en la ciudad era muy lenta, bien para defender a la comunidad misma y a sus líderes naturales, o bien, al compañero miliciano amenazado en su vida y que, paralelamente, el poder de las bandolas seguía en crecimiento, por lo tanto, optó por sacar provecho de su proyecto político militar y continuar como milicias pero independientes de los grupos insurgentes, buscando defender a la comunidad, realizando acciones diseminadas por el territorio “cazando” a los enemigos del pueblo, fueran bandas, drogadictos, desechables o ladrones, en un comportamiento más marcado por la emoción y el ejercicio del poder.

“ ... muchos de los jóvenes que hacen parte de las milicias buscan protagonismo y reconocimiento social a través de la única forma que han conocido, la violencia, y adhieren a ella no necesariamente porque compartan el ideario político de sus jefes sino por un real afán de servicio a las comunidades y como una expresión de búsqueda de identidad.” (Alcaldía de Medellín, 1994:27)

Las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, surgieron en 1986, como una disidencia guerrillera, reclamando su independencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FARC, M19, ELN) aunque reclamándose como guerrilla urbana revolucionaria, y como respuesta a la guerra sucia desatada por el Estado y a las masacres. Desarrolló su trabajo táctico y estratégico más como proceso militar y de limpieza que de labores organizativas lo cual, históricamente, produjo su mayor desgaste y que posteriormente hubieran tenido que pactar con la Administración Municipal. Criticaron toda participación política institucional –lo cual es paradójico con sus pactos de 1994- rechazaron la participación electoral y no apoyaron los procesos organizativos barriales.

Como actores sociales desgajados sus acciones directas no son profundamente pensadas, aunque si tienen vocación de cambio. Sus acciones oscilan entre el enfrentamiento personal y la acción colectiva.

Luego surgieron las Milicias Populares de Valle de Aburrá, que se preocuparon por el trabajo comunitario, impulsando en los barrios donde se asentaron, la conformación de las Acciones Comunales, las Asociaciones de Padres de Familia, Comités Cívico Populares, agrupaciones Juveniles -dedicadas al arte, el deporte, la música, la organización de torneos- y la formación de Microempresas como economía alternativa.. Este grupo de milicia enfatizó más el proceso organizativo que el de ajusticiamiento de delincuentes y drogadictos, sobre la idea de que el problema de las bandas era un problema pasajero. Su propósito se esbozó incluso en la elaboración de un plan quinquenal para la construcción de un movimiento político en toda la zona metropolitana (El Colombiano, 1991:4b)

El proceso de reclutamiento de los milicianos fue muy laxo, se incorporaba a de cualquier persona con la única condición de que quisiera defender al barrio, sin importar su procedencia –podía provenir de las bandas o ser un drogadicto o delincuente regenerado- Contrario a lo que ocurrió con aquellos milicianos del M19, aquí el énfasis se puso en la formación militar, relegando lo político. Quizás esta ausencia de formación y compromiso político ha sido una de las principales causas de su desarticulación y su fácil “cambio de bando”.

Al despuntar la década de los 90’s, empezaron a ubicarse en los diferentes barrios de las comunas nororiental y occidental, las Milicias Populares del ELN⁵ que se ligaron a las Milicias Populares del Valle de Aburrá y las Milicias Bolivarianas de las FARC. Posteriormente, hacia 1996 irrumpen las Autodefensas de Carlos Castaño, a través del Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara. También entre 1996 y 1997 aparecieron los Comandos Armados del Pueblo (CAP)⁶.

Las milicias hasta mediados de esa década se consolidaron sobre la pretensión de procurar la provisión de derechos sociales y económicos y garantizar la seguridad colectiva. Esto les generó reconocimiento y les diferenció de los combos, a los cuales combatieron.

Es importante reseñar que hasta esta fecha, fuera de actos aislados como acciones de terrorismo, las milicias no han realizado acciones ofensivas contra los organismos estatales. Por tanto, no corresponden a estrategias de guerra urbana.

Al imponer formas disciplinarias e incluso actitudes morales, todas de corte draconiano, se ha caído en excesos que le han restado apoyo social a las milicias. En muchas ocasiones, bajo el amparo miliciano, se ha utilizado la violencia y la intimidación para ocultar intereses particulares lo que, paradójicamente, acentúa los desarraigos, la estigmatización y la pobreza.

La opinión ciudadana se expresó en términos de apoyo inicial a las milicias, pero luego se cayó en un desencanto. Muchas personas no expresaron sus desacuerdos, quizás por temor, con la forma indiscriminada de los ajusticiamientos, pues se pasó a ejecutar a personas por cualquier cosa, en un proceso creciente. Se mataba por simple sospecha, aunque luego se pudieran reconocer las “equivocaciones”. Paralelamente, al decaer el apoyo ciudadano, se incrementó la presencia paramilitar. Hoy se habla de que los paramilitares controlan el 75 % de los territorios populares de Medellín, en un proceso que se relata más adelante en este texto.

⁵ Milicias 6 y 7 de Noviembre, Milicias América Libre, Milicias Obreras, el Inconforme Popular, Milicias Compañero Martín.

⁶ Es importante anotar que los rangos de edad de todos estos combatientes se han ubicado entre los 23 y 28 años, es decir, se trata de jóvenes desesperados, unos por las condiciones de miseria, otros hastiados de los atropellos de la delincuencia común y otros de una fuerte convicción anticomunista. Todos ellos recurren a su vez a pobladores más jóvenes, entre los 16 y 25 años, que son obligados a entrar a estos grupos, bien sea engrosando las filas de combatientes, o brindando colaboración proporcionando información sobre los movimientos de la gente, rutas de buses, etc. La constante entre todos los grupos armados es que, cada vez, la población combatiente es más joven.

Recientemente, y a raíz de la arremetida estatal contra los bastiones de milicianos⁷ el frente Luis Fernando Giraldo del ELN y que opera en Medellín, explicó el por qué de la presencia de ellos:

"la ciudad es la retaguardia enemiga y es allí en donde concentra su fuerza represiva, su principal accionar ideológico y su reserva estratégica. La disputa de los centros urbanos es un asunto nodal para el estado. (...) Con el aumento de la población urbana aumentó nuestra presencia, pero aumentó nuestra vulnerabilidad ante el accionar militar. (...) La guerra que se vive en el país, y tiene expresión en las ciudades, es solo causa de la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades a que son sometidos los sectores populares. (...) La guerra continuará hasta que se resuelvan las deudas sociales, económicas y políticas de la dirigencia con su pueblo..."(El Colombiano, 2003:12^a)

El mensaje es bastante claro: No habrá paz mientras no haya justicia social y sea derrotada la pobreza.

Pero las milicias urbanas, como dijimos, antes que responder a una estrategia de confrontación radical con el Estado y enarbolar banderas políticas contestatarias, comenzaron a desarrollar un proceso de construcción de poder, copando los espacios que el mismo Estado dejaba abandonados. Fue así que se hicieron fuertes y ganaron adeptos en territorios pequeños y donde cumplieron labores policiales, particularmente de confrontación y exterminio con bandas delincuenciales, en una suerte de "limpieza social"⁸. Las tareas específicas que se propusieron fueron: vigilar los límites de las barriadas populares, protegiendo a los vecinos, e incluso a los empleados de empresas de servicios públicos, de las bandas juveniles, de los escuadrones de la muerte y de las bandas sicariales y actuar como mediadores y árbitros en los conflictos entre vecinos o en el seno de las mismas familias (Jaramillo, 1994: 27).

Esta fue una forma muy peculiar también de desarrollar procesos de identidad, de inclusión: el territorio sobre el cual el actor armado ejerce su dominio, cubre con su manto e *incluye* a los pobladores, al menos vinculados por una relación de contigüidad espacial, pero que también tienen ciertas características, que les diferencia de los "otros" –este es "nuestro" barrio, "nuestra" cuadra, "nuestro" sector- y se les defiende⁹. En estos territorios no se puede penetrar impunemente, se requiere salvoconducto. Ahora bien, en reciprocidad, el grupo armado exigió inicialmente reconocimiento y luego apoyo logístico y económico.

Resulta obvio que existiera una pretensión clara de legitimidad por parte de las milicias, pues ellas se consideran verdaderos representantes de la comunidad

⁷ Quizás el hecho más reconocido mundialmente, pues los medios masivos le otorgaron gran despliegue, fue lo que el Alcalde municipal, Dr. Luis Pérez denominó, "el rescate de la comuna 13".

⁸ Pese a ello, en declaraciones a la prensa el General Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada con asiento en Medellín, seguía viendo la vieja estrategia subversiva pues decía que "Las milicias de las FARC y el ELN tienen varias misiones: reclutar combatientes para los grupos rurales, recaudar fondos mediante la extorsión y el secuestro para financiar los comandos rurales; establecer núcleos de propaganda para la organización; servir como retaguardia para los combatientes enfermos porque muchos de ellos están llegando a reponerse a Medellín". (El Colombiano, "Guerra Urbana no ha prosperado", 2002).

⁹ Paradójicamente estos grupos armados, milicianos por ejemplo, prohicieron principios que en comienzo son refuerzo del orden que se supone combaten: los valores de la familia, las sanas costumbres, la no violencia Intrafamiliar, la no promiscuidad, etc.

que padece las injusticias. Su legitimidad deviene de la defensa que hacen de la vida, la propiedad y la integridad de los pobladores y del uso de la violencia como instrumento de cambio social y como medio para imponer “el nuevo orden”.

Como reacción al dominio territorial que, en buena parte de la geografía colombiana y en particular en las ciudades, venían ejerciendo los grupos subversivos, unido a la ineficiencia de los organismos armados oficiales, surgieron los *paramilitares*. Su crecimiento y su violencia fueron meteóricos en comparación con el de las guerrillas, quizás por el sospechado apoyo del ejército y los organismos de seguridad. Al parecer no han tenido una dirección unificada y coherente, sino jefes independientes.

Su presencia hace que se vivan procesos de resignificación del espacio urbano.

En la ciudad se siguió el mismo modelo agrario de penetración paramilitar, se conformaron las llamadas “cooperativas de seguridad Convivir”, que fueron auspiciadas por el gobierno departamental desde la época del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez que, con la idea de la autodefensa, se insertaron como parte de una política que pretendió controlar simultáneamente la criminalidad y la insurgencia. A partir de allí se dio la proliferación de cuerpos armados (informantes, policía secreta, grupos de choque, etc.) en función de la lucha contrainsurgente.

Es de resaltar el hecho que estos actores sociales y políticos, transformaron a muchas bandas delincuenciales y las colocaron a su servicio, de hecho, les brindaron entrenamiento militar, mejoraron su capacidad de combate y, en muchos casos, mejoraron su armamento.

El poder del paramilitarismo deviene de dos hechos: de un lado, su indudable ligazón con el narcotráfico, que les proporcionó el mejor armamento del mercado mundial y el dinero para seducir a los integrantes de milicias y bandas, de otro lado, su accionar se realizó bajo el amparo y protección de los organismos estatales de seguridad, quienes han estado interesados en “liberarse” del peso guerrillero y delincencial presentes en los barrios.

Pero acá surge una discusión que se me antoja interesante: ¿Se trata de actores sin conciencia? ¿actúan sólo mediados por el dinero?. A mi modo de ver, si bien es cierto que muchos de sus líderes y militantes han ingresado al paramilitarismo por dinero y para proteger exclusivamente el negocio del narcotráfico, también considero que es cierto que algunos de estos líderes y actores paramilitares han desarrollado un sentimiento de profundo anticomunismo y cada vez cohonestan menos con el narcotráfico. Como modelo de estas perspectivas, hasta que se demuestre lo contrario, podría ser el enfrentamiento intestino que llevan en esta ciudad los bloques Nutibara y Metro.

Por supuesto, no quiero significar que posean una ideología propia y mucho menos, que están adscritos a un novedoso proyecto militar y político. Sin

embargo, conviene recordar que en los estatutos de las autodefensas, que fueron aprobados en 1996 y refrendados en Diciembre de 1997 se estableció claramente que se trata de “una organización político-armada y antisubversiva de carácter civil”. Supone, como en reiteradas ocasiones lo expresaron sus máximos jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que se mantendrán en actividad hasta que se termine la guerrilla. Si esta desaparece, es derrotada o pacta con el Estado, la razón de ser de las autodefensas, automáticamente las obliga a desmovilizarse.

Habría que incluir a otro “grupo”, que según los politólogos no se constituye en actor social, en la medida que hacen parte del Estado y el gobierno, pero que es parte fundamental en el panorama de la confrontación. Nos referimos a la Policía Metropolitana, a la IV Brigada del Ejército, a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Fiscalía, el CTI y el DAS, quienes tienen la obligación de proteger los corredores estratégicos de movilidad que conducen a la ciudad y que la comunican con el departamento y el resto del país; infraestructuras viales, geográficas, diversidad e hidrología -dada su cercanía a las carreteras al Mar, puerta de acceso a la región de Urabá, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena- También controlar el Oriente antioqueño que, además de zona agraria y de producción de energía eléctrica, comunica con el eje cafetero, y otros sectores que sirven de canales para desplazarse hacia el sureste. Todos son sitios claves donde se desarrollan importantes megaproyectos económicos y que permiten la salida e ingreso del comercio.

En este panorama, vemos que cientos de familias de diferentes zonas de Medellín se han encontrado en medio de la confrontación entre los organismos de seguridad del Estado, la guerrilla y las autodefensas quienes luchan por el control de aquellos barrios y cuya ubicación es considerada estratégica debido a los corredores que comunican sus “laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano”, en donde los frentes rurales de la insurgencia y el paramilitarismo históricamente han reclamado, y a la vez dotado, el abastecimiento, la munición y las vías de ingreso y salida a todo el Valle del Aburrá.

Y ¿Cuál ha sido el resultado? se ha incrementado la movilidad intraurbana, pero no a causa de la búsqueda de mejores oportunidades, o por cambios en el lugar del trabajo u otras causas que son tan corrientes en las explicaciones de la planificación urbana, la sociología y la antropología, sino producidas por un desarraigo –territorial y familiar- obligado por un desplazamiento forzoso, en una suerte de destierro, en una huida apenas lógica de la población civil de los frentes de guerra.

A manera de ejemplo traemos este recuento desgarrador:

“Las 40 casas de la manzana, a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20 de Julio y Betania, ya estaban desocupadas hacía dos meses, desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con las esquirlas de las granadas y las ráfagas de los fusiles. Los únicos que decidieron quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un

préstamo del que aún deben la mitad. Por eso persistieron y mandaron a los niños a la casa de la abuela, en Guayabal. En esos días, a comienzos de febrero, el tropel de los que huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las paredes y mascotas, en total cinco perros, tres gatos y una coneja de orejas grises que terminó muerta de un susto después de la detonación de una papa explosiva.” (José A. Castaño, 2002).

Por supuesto, esta situación es corriente en muchos de los barrios de la ciudad, aunque se consideran críticos: Santo Domingo Savio¹⁰, Popular, Ocho de Marzo¹¹, Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez, solo por mencionar algunos y que tienen en común ser barrios de las periferias en los que

“denuncian los habitantes, hay cuadras desoladas, marcadas por el abandono y los graffitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se culpan de la desgracias de los que se marchan” (Ibídem).

Los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II han sido escenario de diversos enfrentamientos y de cambios en el control zonal: algunas bandas que se han colocado al servicio de los paramilitares –recordemos que esta estrategia de sometimiento de estas formas de delincuencia por parte del paramilitarismo, fue una estrategia copiada de los mismos comienzos de presencia insurgente en la ciudad- para enfrentar grupos de “milicianos insurgentes”. Allí encontramos bandas como La 38, La Caseta, El Hueco, La 100, Los Costales, Los Patiamarillos, Los Triana, Estrella Roja y El Sanduche. Su presencia ha intensificado la movilidad en estos barrios.

Merece mencionarse la banda de Los Nachos, surgida hacia 1985 en el barrio Popular I. Esta banda debe su nombre a un joven llamado Ignacio, quien había recibido instrucción militar por el M19 dentro de sus “campamentos de Paz”. Esta banda siempre actuó independientemente del narcotráfico, aunque se alquiló al mejor postor.

También las bandas sicariales y de delincuencia organizada han sido actores de primer orden en este proceso migratorio interno. Muchas bandas prevalidas del poder que otorga la metralleta y el dinero, procedieron a desalojar familias enteras, a violar sus mujeres, a matar a otros jóvenes por la simple sospecha de ser soplones o amigos de otros “combos”.

El costado occidental de Medellín –corredor estratégico- ha sido uno de los más sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del ELN, de las FARC, los Comandos Armados del Pueblo (CAP), y es permanente la incursión de grupos de autodefensas. En los barrios Robledo, San Javier, 20 de Julio, La Independencia, Vallejuelos, Belencito, Blanquizal y la parte alta de La América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre y El Picachito los jóvenes milicianos que han controlado buena parte de estos barrios, integraron a los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

¹⁰En este barrio es corriente que milicianos del ELN, vestidos de civil, patrullen el sector.

¹¹Uno de los barrios más periféricos en la zona oriental, en comienzo dominado por los milicianos del ELN, pero hoy controlado por las autodefensas del Bloque Metro.

En Castilla, se afincaron los Comandos Obreros Populares (Milicias Populares de Liberación), surgidas como disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). En tanto que en algunos sectores de la zona centrooccidental y en particular en el barrio La Iguana –zona tuguerial estratégica en la medida que dará acceso a uno de los megaproyectos de ingeniería antioqueña como es el Túnel de Occidente, y ubicada en el costado occidental inmediato del río Medellín- se ubicaron las Milicias Bolivarianas, las cuales son orgánicas de las FARC.

Igualmente, en las laderas de la zona periférica oriental que da acceso al Valle del oriente antioqueño en donde afinca sus raíces el Bloque Carlos Alirio Buitrago del ELN, las autodefensas del Bloque Metro, que fue el primer grupo paramilitar conformado en la ciudad y funcional a las ACCU de Castaño y Mancuso, intentan cerrar un cerco, entre los barrios de invasión Carambolas, Santo Domingo, La Esperanza, Carpinelo, María Cano y La Sierra, es decir entre las Comunas 3 y 8. Para esta estrategia, las autodefensas infiltraron los Núcleos Revolucionarios 6 y 7 de Noviembre de las milicias del ELN, les ofrecieron dinero y muchos integrantes de la insurgencia, como se dice en el lenguaje popular, *“se torcieron y comenzaron a dar dedo”* a sus antiguos compañeros de lucha.

En la parte alta de la zona centro-oriental, en los barrios Versalles y Manrique, se siente la presencia de la Milicias Populares Revolucionarias. Muchos de sus miembros son venidos de la vieja Corriente de Renovación Socialista.

Los habitantes de estos barrios populares, lógicamente, se sienten abandonados a su suerte. Toda clase de atropellos se suceden por parte de los actores armados, y la negligencia o el temor de los representantes de los organismos estatales, e incluso, de derechos humanos no les escuchan, ni investigan sus denuncias.

El control que ejercen los actores armados –milicias, paramilitares, bandas juveniles, delincuencia organizada- no solo implica el control sobre la movilización de la población, pues incluso el acceso y la movilidad por los barrios tiene que ser pactada y autorizada por quien ejerce el poder en él y se hacen los respectivos retenes para investigar quién se transporta en los buses, en los colectivos y en los taxis, pero además se ejerce el control sobre los alimentos y los medios de transporte. Es el ejercicio del dominio en toda la extensión de la palabra.

Se volvió corriente en todos estos barrios, que las viviendas se colocaran al “servicio de los guerreros” pues, en casos de combates, era obligatorio abrirles las puertas para que se parapetaran o se refugiaran según el caso –de no hacerlo la consecuencia era la expulsión y pérdida de la propiedad, o de la vida- pero además, se debía financiar a los combatientes quienes comenzaron a “cobrar” por el servicio de vigilancia y “limpieza” del barrio. Todos debían aportar los “impuestos” decididos por los actores armados: los pequeños negocios de expendios de bebidas, de víveres, de servicios, los distribuidores también tenían sus cuotas para poder ingresar al barrio ... “Aquí todos pagan”.

Es evidente el progresivo incremento de la *victimización* de la población civil y no solo durante los momentos y las zonas de combate. Cada vez, se produce con mayor rigor la violación de derechos humanos y es mayor la vulneración de la población civil, por parte de todos los actores armados, organizados o no.

Una ubicación, aunque muy general, de todos estos actores armados puede ser la siguiente:

LOS BARRIOS Y LAS BANDAS

En negrita las milicias, las demás son delincuencia común

BARRIO	BANDAS
<p>COMUNA NORORIENTAL: Manrique Oriental</p> <p>Manrique Transmayo Santo Domingo La Frontera Popular</p> <p>Nuevo Horizonte Villa del Socorro Andalucía La Francia Granizal Santa Rita Zamora Aranjuez Santa Cruz</p>	<p>La 30 u oficina, Los Marines, La 41, Los Píldoras, Los Tobis, Los Chiches, La Terraza y La Montañita La Batea y La 30 La Torre, La 29, La Silla, El Trébol, Estrella Roja. Los Triana, Cañada Negra Los Costales, Los Nachos, Los Patillones, Cañada Negra, los Calvos. Los Joyeros Los Champús, los Nachos La 49 La Cancha, La 38, El Plan Los Triana Los tubos, La terminal, La arboleda El Hueco, La 103, La 100.</p>
<p>COMUNA CENTROORIENTAL: Caicedo La sierra Caicedo Enciso Boston La Milagrosa Buenos Aires</p> <p>El Salvador San Diego</p>	<p>Bloque metro, El morro, La Libertad Los mexicanos Los concejos, De praga, Las castas Marquetalia, El alacrán, El nacional, Pablo Escobar Los cerros, El Mayey o Caunces, El Plan, Del gordo o David. El Salvador El Buda</p>
<p>COMUNA CENTROOCCIDENTAL: Aures Robledo</p> <p>La Iguana Antonio Nariño El Pesebre San Javier Vallejuelos – Blanquizal Belencito Corazón París Santander Picachito Doce de octubre</p> <p>Castilla</p>	<p>Depósito, El Chispero Los búcaros, La oficina, Los Gómez, Matallana, El hueco, La cuchilla La Iguana Los cuquitas Los paras Los cobres, Los zaros, Los colchoneros, El socorro Los CAP Los CAP La banda de Frank, Los tintos fríos, Los ranchos Beto, Los ranchos, La 115 Picachito, Los rieles o Los Palomares. Los Sotos, De Guisao, Los caretrapos, La 30 del doce. Los machacos, Los mondongueros, El carrusel,</p>

Alfonso López Kennedy	Los lecheros, La 98 o sancochos, La 70, La imperial Los cola y pola. La oficina
CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA Altavista	Los chivos, Autodefensas, Los mister o sabor latino, Los piñeros
ZONA SUROCCIDENTAL: Barrio Antioquia La Raya Las Violetas	Los ranchos, Los coquitos, La 24, La Estefanía, La cueva La Raya, El bolo, San Rafael, Combo de Tavo Las Violetas, Los Magníficos, Las Mercedes, Belén Zafra.
CORREGIMIENTO S. CRISTÓBAL: San Cristóbal	San Cristóbal, De Piru
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO: San Antonio de Prado	Limonar I y II

Fuente: Elizabeth Yarce, 2002

Un relato muy diciente lo extractamos del periódico El Colombiano, de un habitante del barrio 20 de Julio ubicado en la Comuna 13, al centro-occidente de Medellín:

"Por culpa de las milicias no volvió a subir el carro de la cerveza, ni el de las arepas, ni el de los cigarrillos, tumbaban lámparas de los postes y quedamos sin energía porque no podían subir tampoco los de Empresas Públicas. Últimamente sólo podía subir el carro con el pollo.

Cinco grupos pedían vacunas y a la hora de la verdad eran los mismos. El año pasado nos pidieron \$5 millones, les dijimos que no teníamos, entonces decían que hipotecáramos la casa, que vendiéramos lo que pudiéramos o sino mataban a mi mamá. Empezaron a llamar. Llamaban y llamaban y nos decían que ya habían matado a otro por no pagar. Así siguieron hasta que nos tocó endeudarnos para conseguir esa plata. Estuvimos mal del todo y ellos seguían aquí, haciendo retenes. Nos tocó tirarles la plata en una bolsa por el balcón, como si nada.

Para colmo, a pesar de que ya habíamos pagado esa vacuna nos tocaba pagarles, obligados, entre \$8.000 y \$15.000 semanales y que si denunciábamos algo a las autoridades no volvíamos a ver a la hermana que trabajaba. Así, le tocaba a uno vivir en este barrio. Vimos matar muchos comerciantes, entre ellos al de la carnicería. Mataron también muchas jovencitas que se las llevaban, les hacían de todo y después las tiraban." (Carlos A. Giraldo, 2002)

Se cuenta que en medio del combate por la "recuperación" ordenada por el Alcalde Municipal de la comuna 13¹², en el 2002, la escuela del barrio Vallejuelos, que es una de las pocas construcciones en material del sector –el resto son ranchos de madera- fue convertida en trinchera.

Pero la guerra no se libraba solo en los espacios de los barrios populares, sino que traspasaba esas fronteras invisibles, de allí que los grupos de milicianos por ejemplo, encontraron en la industria del secuestro una verdadera veta

¹²La Operación Orión fue adelantada por las autoridades en la Comuna 13, al occidente de Medellín y contra los frentes urbanos de las FARC, del ELN y de los CAP. La comuna se presentó como una zona controlada totalmente por las milicias populares al servicio de la insurgencia, desconociendo el incremento del control paramilitar en la zona, hecho que posteriormente fue denunciado por líderes comunales.

lucrativa y cualquier muchacho de clase alta representaba la posibilidad de una extorsión segura. Por eso, muchos habitantes de estos barrios como El Poblado por ejemplo, pierden su noción de ciudad y sólo conoce las transversales de este barrio, desconociendo todo fuera de esa ruta, su habilidad más allá de esas fronteras desaparece, y se llenan de pánico, el centro histórico de su ciudad no les dice nada y solo lo han atravesado en sus vehículos. Es “como si cruzaran un lindero invisible hacia una dimensión desconocida, plagada de seres peligrosos, come carne y tira fuego.”

Por supuesto no es temor enfermizo, es el resultado de los medios de comunicación y de las mismas estadísticas: en el Centro y los barrios periféricos se cometen diez de los doce asesinatos que hay en la ciudad al día, allí esconden el 90% de los carros hurtados en la ciudad y se enfrentan los guerrilleros y las autodefensas, igual que en la zona rural, con fusiles y con bombas.

Así se acentúan las fronteras invisibles y se reconocen los espacios de guerra.

Las estrategias dominantes de estos diferentes actores apuntan a la construcción de micropoderes, a lo que las FARC denominaron “cerco periférico”, a la territorialización del poder que, por supuesto, supone y es concordante con la territorialización de la violencia. Se trata de ir progresivamente copando cada uno de los espacios de la ciudad, determinando el uso del espacio e incluso, su simple tránsito. Ello va creando *fronteras invisibles*. Nos encontramos ante un proceso cíclico, que se retroalimenta: Se destruye tejido social, se incrementa la violencia, se fortalecen las fronteras invisibles y se enajena la ciudad como un todo para los ciudadanos.